**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
AGUSTÍN CODAZZI- CESAR**

Agustín Codazzi – Cesar, Diciembre Once (11) de Dos Mil Veinte (2.020).

REF: Acción de Tutela promovida por LEIDYS JULIETH CRESPO ESTRADA, actuando como agente oficioso de la señora LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ en contra de COOMEVA E.P.S y LA CLÍNICA ARENAS.

Radicación No.: 200134089001-2020-000116-00

ASUNTO A TRATAR

Aborda el Despacho la labor de proferir la decisión de fondo que en derecho corresponda dentro de la presente Acción de Tutela promovida por LEIDYS JULIETH CRESPO ESTRADA actuando como agente oficioso de la señora LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ, en contra de COOMEVA E.P.S y LA CLÍNICA ARENAS, en defensa de sus derechos fundamentales a la Vida, y a la Seguridad Social en Salud consagrados en los artículos 11, 48 y 49 de la Constitución Política, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes.....

ANTECEDENTES

La señora LEIDYS JULIETH CRESPO ESTRADA, actuando como agente oficioso de su señora madre LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ, mediante solicitud radicada por reparto en este juzgado, depreca de esta agencia judicial la protección de los Derechos Fundamentales de su agenciada, a la Vida y Seguridad Social en Salud, consagrados en los artículos 11, 48 y 49 de la Constitución Política, pretendiendo para ello se ordene a las entidades accionadas COOMEVA E.P.S y LA CLÍNICA ARENAS, lo siguiente: **1).**_ Que en término inmediato proceda a autorizar las intervenciones y los instrumentos necesarios para [el tratamiento] de las heridas de su madre, si aún no se las hubieren realizado. **2).** _Que se ordene a la Clínica Arenas, que proceda de manera diligente e inmediata frente a las heridas (sic) de su señora madre LEIDYS ESTRADA, con las intervenciones quirúrgicas necesarias y demás tratamientos que exijan las heridas y el estado de salud, si aún no se ha hecho. **3).**_ Que en caso de que previa a la emisión del fallo de tutela las accionadas hayan procedido con las obligaciones que le corresponden a cada uno, solicita al señor juez que les ordene a las mismas abstenerse de presentar nuevas obstaculizaciones para la prestación de servicios asistenciales a su madre, tanto en urgencias como en el pos operatorio.

Finca la accionante su solicitud en los hechos relacionados en la misma, los cuales podemos enunciar de la siguiente manera:

- Que el día 23 de Noviembre del 2020 la madre LEYDIS ESTRADA HERNANDEZ sufrió un accidente en bicicleta, por lo que fue intervenida de urgencia en el HOSPITAL DE AGUSTIN CODAZZI. Por la gravedad de sus heridas fue remitida el 24 de Noviembre del 2020 a la Clínica Valledupar, en la que a través de varios estudios médicos se evidenciaron las consecuencias del accidente como son; Fractura de radio distal derecho, fractura de clavícula derecha, inestabilidad radiocarpianalitación de la flexión de los dedos; Inestabilidad en la cintura escapular paciente con indicación quirúrgica, trauma de tórax con fractura en 4to arco costal izquierdo; diagnósticos que exigen intervención quirúrgica de urgencia, por lo que fue programada para intervención, pero quedando a la espera de una autorización por parte de la EPS COOMEVA para que procediera a autorizar la cirugía y los instrumentos necesarios para realizarla, quien desde el 24 de Noviembre de 2020 no ha procedido con ninguna autorización, manifiesta que se ha extendido el sufrimiento de su madre, quien no ha recibido ningún tipo de atención a las heridas del accidente.
- Que la decisión de la EPS COOMEVA fue autorizar una remisión para LA CLÍNICA ARENAS el 27 de Noviembre del 2020 a las 9 de la noche, para que en dicha entidad se le realizaran las intervenciones quirúrgicas necesarias a su madre, intervenciones

que tampoco se han realizado, ya que la EPS COOMEVA tampoco permite que se proceda.

- Que es inconcebible que ya superados más de 8 días del accidente su madre no ha recibido ningún tipo de atención de fondo necesaria para el tratamiento de las graves heridas, ni la Clínica Valledupar, ni la Clínica Arenas han querido intervenir quirúrgica a su madre, justificando su abstención en las ausentes intervenciones por parte de la EPS COOMEVA que también ha sido desconsiderada con la situación de urgencias y que está permitiendo que se amplíen las consecuencias de las graves heridas referidas anteriormente.
- Que por las vulneraciones mencionadas anteriormente, se interpuso una queja ante la súper salud desde el 27 de Noviembre de 2020 , bajo el radicado 1-2020-561947, y solicita al juez que se conceda una medida provisional y urgente en la que ordene a la EPS COOMEVA, que de manera inmediata a la notificación de la admisión de la acción de tutela, proceda a autorizar las intervenciones necesarias para las heridas de su madre, como también la Clínica Arenas proceda de manera diligente frente a las heridas de su madre , como también salvaguardar los derechos fundamentales que están siendo tutelados y evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los referidos en la presente acción.
- Que es pertinente aclarar que la presente acción es interpuesta por su hija como agente oficioso de su madre la señora LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ, teniendo en cuenta la imposibilidad de esta de interponer la acción, ya que, por sus graves heridas, difícilmente puede moverse, hablar y hasta alimentarse. Por eso solicita se ampare los derechos fundamentales deprecados en la presente acción.

El accionante aportó como pruebas de sus asertos, las siguientes: **a).** _ Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Accionante y de la Agenciada. **b).** _ Fotocopia de la Historia Clínica.

Por venir en legal forma la solicitud fue admitida mediante auto de fecha 1 de Diciembre del cursante año, en contra de COOMEVA E.P.S y LA CLÍNICA ARENAS, requiriéndose a las entidades accionadas para que en el término de dos (2) días contados a partir de la fecha de la notificación del auto admisorio, se sirvieran rendir un informe sobre los hechos planteados por la peticionaria, habiéndose pronunciado la primera, mientras que la segunda guardó absoluto silencio.

CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA COOMEVA E.P.S.

La señora CARMEN JULIA MÉNDEZ TOSCANO, en su aludida calidad de Analista Regional Jurídico de Coomeva E.P.S. S.A, en escrito radicado ante este despacho, manifiesta que en aras de garantizar el derecho a la defensa y emitir un concepto frente a las pretensiones del accionante se procedió a solicitar concepto al Área Nacional Integral que conceptúa lo siguiente: "Usuaría LEYDIS ESTRADA HERNÁNDEZ se encuentra afiliada a COOMEVA E.P.S S.A en calidad de cotizante y su estado actual es activo" . Señala que es una usuaria de 39 años con diagnóstico de Fractura de Radio Distal Derecho; Fractura de Clavícula Derecha; Inestabilidad Radiocarpial con indicación quirúrgica; Trauma de Tórax con Fractura en 4to Arco Costal Izquierdo.

Agrega que mediante medida provisional se ordena a COOMEVA EPS, autorizar los procedimientos quirúrgicos, el suministro de instrumentos, insumos y medicamentos necesarios para el manejo y tratamiento de lesiones y patologías e igualmente se ordene a la IPS, Clínica Arenas, donde se encuentra internada la paciente, proceda a realizar los procedimientos ordenados por los médicos a fin de salvaguardar la salud de esta hasta que se resuelva de fondo la tutela. Agrega que al validar en el aplicativo ciclos de COOMEVA EPS, se evidencia que no se encuentra en el sistema solicitud, ni ordenamiento alguno pendientes por auditar o aprobar, referente a de la reducción quirúrgica de fracturas de cúbito, radio y clavícula. Señala que se procede a validar con el área de gestión hospitalaria para que informe el estado actual de la paciente y gestiones realizadas. Aclara que se remite el caso al área de gestión hospitalaria de COOMEVA E.P.S para que realice

gestión con el CRAUH de COOMEVA EPS, en el sentido de determinar si ellos tienen conocimiento del caso y saber en qué estado se encuentra la usuaria y para que gestione con las IPS y priorizar la programación de fecha de efectivización de las evaluaciones pendientes, para dar así respuesta a la medida provisional, inmediatamente se aclare el caso, bajo la norma vigente, procederán si la responsabilidad es de la EPS a la debida autorización de lo solicitado.

En cuanto al tratamiento integral, manifiesta que la integralidad es un principio general en cuanto a la obligación del estado y de las entidades prestadoras de servicio de acuerdo con el Artículo 8 de la ley 1751 de 2015 y la Resolución 5857/2018, sin embargo manifiesta que no les parece justo que al momento de proferir el fallo de primera instancia se llegue a aprobar por el juez constitucional, tratamiento integral, pues no creen conveniente recargar al sistema de gastos innecesarios, pues no está demostrado que COOMEVA EPS, este negando en forma deliberada otros servicios de salud y no se cuenta con concepto médico que recomiende en este sentido, y al aprobarse por el juez constitucional de primera instancia, es desbordar los lineamientos económicos, pues dicen se verían abocados a todo aquello que le prescriban los médicos tratantes a la accionante por patologías indeterminadas.

Manifiesta que reconocen que sería un riesgo para la vida de la usuaria ya que estas decisiones pueden ocasionar eventos adversos al dejar abierta la posibilidad de que los usuarios pueden tener acceso a la salud sin el control del caso ni estudios de pertinencia, que lo único que hace es salvaguardar la vida de los pacientes, pues no se sabe en futuro cual es la patología que se podría presentar, ni mucho menos cuales medicamentos, procedimientos o tratamientos que contrarrestarían esa patología.

Agrega que entiende la preocupación en la presente acción de tutela y el motivo por el cual fueron vinculados a esta acción constitucional, pero es conveniente aclarar que en ningún momento la entidad ha incumplido con la prestación del servicio de salud requerido por el usuario, pues ha brindado y autorizado todos los servicios médicos requeridos para el manejo y buen estado de su salud, señalando además que, COOMEVA EPS como administradora, está obligada a prestar los servicios médicos, asistenciales y medicamentos que requiera, lo cual no se ha vulnerado ni negado.

Finalmente solicita al despacho que se declare la improcedencia de la acción de tutela, pues la entidad siempre está en procura del bienestar de sus usuarios, autorizando exámenes, medicamentos, y procedimientos que se encuentren dentro del plan obligatorio de salud y de aquellos que no lo están y en el caso en particular ha adelantado las gestiones pertinentes para garantizar la prestación del servicio al usuario.

Una vez enunciados los antecedentes del caso y habiendo sido relacionado el caudal probatorio acopiado, procederemos a adoptar la decisión de fondo que en estricto derecho corresponda, previas las siguientes...

CONSIDERACIONES

1._Competencia

Para esta casa judicial es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto – Ley 2591 de 1991 y artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, la competencia para conocer de la presente acción de tutela recae en este despacho.

2._Legitimación de las partes

La Señora LEIDYS JULIETH CRESPO ESTRADA actuando como agente oficioso de su señora madre LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ, por ser esta última la persona afectada con los presuntos actos omisivos de la entidad accionada se encuentra legitimada para incoar la presente acción de tutela; mientras que COOMEVA EPS y la CLÍNICA ARENAS, por ser las entidades a las cuales la accionante le atribuye los actos omisivos que presuntamente vulneran sus derechos fundamentales, reúnen los presupuestos de legitimidad para comparecer en calidad de accionadas, dentro de este trámite tutelar.

3._ Problemas jurídicos y esquema de resolución

De acuerdo con la situación fáctica planteada corresponde a este despacho determinar los siguientes aspectos: *i)*. _ La procedencia de la acción, y, *ii)* En el evento de que la acción sea procedente, establecer si las entidades accionadas COOMEVA EPS y la CLÍNICA ARENAS, al no autorizarle o brindarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y el tratamiento integral necesarios para el tratamiento y manejo de la patología que padece la paciente agenciada LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ, vulnera sus derechos fundamentales cuya protección se invoca, y de ser así adoptar las medidas de protección pertinentes.

Para resolver los problemas jurídicos planteados, esta casa judicial procederá de la siguiente manera (1). _ Se determinará inicialmente la procedencia de la acción. (2). _ Se referirá a los derechos cuya protección se impetra. (3). _ Se referirá al régimen legal y jurisprudencia constitucional sobre la prestación por parte de la E.P.S. de los servicios respecto al Sistema de Seguridad Social en Salud, que se encuentren dentro o fuera del Plan Obligatorio de Salud. (4). _ Se abordará el caso concreto.

3.1._ Procedencia.

La acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, de carácter preferente y residual, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y en algunos casos por particulares cuando estos se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: a). _ Cuando cumplan funciones públicas o que estén encargadas de la prestación de un servicio público. b). _ Cuando sus acciones u omisiones afecten grave y directamente el interés colectivo; y c). _ Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión respecto al particular. Se quiso limitar la procedencia de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial de igual eficacia para la protección del derecho, o que habiéndolo este no resulte eficaz en consideración a la situación particular que afronta el actor; o que se utilice como mecanismo de carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso que nos interesa no advierte este aplicador de justicia que el tutelante disponga de otro medio judicial de igual eficacia para exigir la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados, de allí que se pueda pregonar de la acción incoada, su procedencia.

3.2._ Derechos cuya protección se invoca

3.2.1. _ Derecho a la Vida. _ Aclarado lo anterior y como quiera que dentro de los derechos fundamentales cuya protección se impetra se encuentra precisamente el derecho a la vida, es procedente señalar que esta garantía entraña no solo la obligación del Estado y de los particulares de preservar la existencia de la persona humana, sino, que encierra además el imperativo deber de asegurar que esa existencia que se busca preservar, se encuentre rodeada de las condiciones mínimas para que se ajuste a los requerimientos por lo menos indispensables para satisfacer las necesidades generadas en razón, precisamente del hecho de existir, en condiciones de dignidad, entendida esta como un derecho fundamental cuyos titulares son únicamente las personas humanas, y que tiene un triple objeto de protección: *i)*. _ La autonomía individual, *ii)*. _ Las condiciones materiales para el logro de una vida digna, y *iii)*. _ La integridad física y moral que resulte necesaria para lograr la inclusión social de una persona excluida o marginada. En resumen, lo que protege el derecho a la dignidad humana es el derecho a vivir como se quiera, el derecho a tener una vida digna, y el derecho a vivir sin humillaciones. (Sent. T-881/02).

Ya sobre el mismo tópico había precisado el Alto Tribunal, en sentencia T-395 de 1.998, con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

"(..) Lo que pretende la jurisprudencia es entonces respetar un concepto de vida no limitado a la restrictiva idea de peligro de muerte, ni a la simple vida biológica, sino a consolidar un sentido más amplio de la existencia que se ate a las dimensiones de dignidad y decoro. Lo que se busca con dicha noción es preservar la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad, ya que, al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable, en la medida de lo posible (..)."

3.2.2._ El carácter fundamental del derecho a la seguridad social y a la salud.

En lo que atañe al derecho a la salud y a la seguridad social, La Constitución Política consagra, en su artículo 49, a la salud como un derecho constitucional y un servicio público de carácter esencial. De este modo, le impone al Estado la obligación de garantizar a todas las personas la atención que requieran. Asimismo, consagra la potestad que tienen las personas de exigir el acceso a los programas de promoción, protección y recuperación.

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el derecho a la salud es fundamental y *"comprende toda una gama de facilidades, bienes y servicios que hacen posible, de acuerdo al mandato contenido en diversos instrumentos internacionales, el imperativo de garantizar el nivel más alto posible de salud."*

En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, estableció:

"1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (...)."

Igualmente, la Observación General 14 adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 2000, expuso que el concepto de salud no se limitaba al derecho a estar sano ya que éste debe atender las condiciones biológicas y socioeconómicas de la persona, y los recursos con los que cuenta el Estado.

Respecto del principio de integralidad ha indicado que se encuentra consignado en el numeral 3º del artículo 153 y el literal c) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993 y que impone la prestación médica continua, "la cual debe ser comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la salud. De igual manera ha sostenido que:

"(...) La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud (...)."

Ahora bien, en los casos que el galeno tratante no establezca el conjunto de prestaciones que conforman la garantía integral del derecho a la salud, "la protección de este derecho conlleva para el juez constitucional la necesidad de hacer determinable la orden en el evento de conceder el amparo, por ejemplo, (i) mediante la descripción clara de una(s) determinada(s) patología(s) o condición de salud diagnosticada por el médico tratante, (ii) por el reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o (iii) por cualquier otro criterio razonable. De este modo, el reconocimiento de la prestación integral del servicio de salud debe ir acompañado de indicaciones precisas que hagan determinable la orden del juez o jueza de tutela, ya que no le es posible dictar órdenes indeterminadas ni reconocer mediante ellas prestaciones futuras e inciertas.

Precisamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dispuesto que tratándose de: "(i) sujetos de especial protección constitucional (menores, adultos mayores, desplazados(as), indígenas, reclusos(as), entre otros)" y de (ii) "personas que padezcan enfermedades catastróficas (sida, cáncer, entre otras), se debe brindar atención integral en salud, con independencia de que el conjunto de prestaciones requeridas estén excluidas de los planes obligatorios".

Así las cosas, esa Corporación ha establecido que la acción de tutela es procedente para proteger el suministro de los servicios médicos que se requieren con necesidad, es decir, aquellos "indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida

gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad” de forma que se “garantiza a toda persona, por lo menos, el acceso a los servicios de salud de los cuáles depende su mínimo vital y su dignidad como persona. Es necesario resaltar que esta obligación resulta prioritaria para el caso de las personas que son más vulnerables por sus condiciones físicas (niños y adultos mayores) o enfermos mentales. (Sent. T-036/13).

En este orden de ideas conviene recordar que el derecho a la seguridad social fue definido por el artículo 48 de la Constitución Política como *“un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley”, obligándose el Estado a garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”.*

Respecto de su carácter fundamental, la Corte ha reconocido que la satisfacción de su contenido, esto es, del derecho a la pensión y a la salud, implica el goce de las demás libertades del texto constitucional, la materialización del principio de la dignidad humana y la primacía de los derechos fundamentales. Empero, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no es suficiente para que proceda su amparo por medio de la acción constitucional de tutela. Para ello es necesario que se cumplan los requisitos previstos en los niveles legislativos y reglamentarios dispuestos para su satisfacción, por cuanto *“algunas veces es necesario adoptar políticas legislativas y/o reglamentarias para determinar específicamente las prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a las mismas, las instituciones obligadas a brindarlas y su forma de financiación”.*

Así, es una obligación del Estado garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social de acuerdo con las normas que lo regulan, por cuanto éstas son las que determinan específicamente las prestaciones exigibles y la forma de acceder a las mismas. Deber que correlativamente genera el derecho a los ciudadanos de exigir su cumplimiento en caso de vulneración o amenaza por medio de la acción constitucional de tutela.

La salud en la Constitución Política es definida, entre otras calificaciones, como un servicio público a cargo del Estado, un deber del ciudadano de procurar el propio cuidado integral, una garantía a todas las personas al acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación (artículo 49), un derecho fundamental de los niños (artículo 44), un servicio garantizado a las personas de la tercera edad (artículo 46), una prestación especializada para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (artículo 47), un bien constitucionalmente protegido en la comercialización de cosas y servicios (artículo 78) y un valor que se debe proteger respecto de toda persona conforme al principio de solidaridad social (artículo 95), de este modo, la salud constituye un pilar fundamental en el ordenamiento constitucional y ha sido reconocido por esa Corporación como un derecho fundamental susceptible de amparo por medio de la acción constitucional de tutela. El carácter fundamental del derecho a la salud radica en que al ser el individuo el centro de la actuación estatal y por ende al generarse frente al Estado la obligación de satisfacción y garantía de los bienes que promuevan su bienestar, la protección del derecho a la salud se constituye en una manifestación de bienestar del ser humano y por ende en una obligación por parte del Estado. Del mismo modo, el carácter fundamental del derecho a la salud se deriva al constituir su satisfacción un presupuesto para la garantía de otros derechos de rango fundamental. (Subrayas y negrillas ajenas al texto original).

El derecho a la salud ha sido definido por el Alto Tribunal como *“la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, que “implica a su vez, la obligación de prestar todos los servicios necesarios para su prevención, promoción, protección y recuperación” (Resalta el Juzgado).*

Asimismo, bajo igual lógica de garantizar el bienestar máximo al individuo, se ha señalado que *“la salud es ‘un estado completo de bienestar físico, mental y social’ dentro del nivel posible de salud para una persona. En términos del bloque de constitucionalidad, el derecho a la salud comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera progresiva”.* Así, la garantía del derecho a la salud incluye el mantenimiento y el restablecimiento de las condiciones esenciales que el individuo requiere

para llevar una vida en condiciones de dignidad que le permitan el desarrollo de las diferentes funciones y actividades naturales del ser humano en el marco de su ejercicio del derecho a la libertad. El derecho a la salud se manifiesta en múltiples formas en relación con las cuales esta Corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse y algunas de éstas fueron recopiladas en la sentencia de tutela T-760 de 2008. Entre los elementos que caracteriza el derecho a la salud pertinentes para la resolución de este asunto y sobre los cuales esa Corte se ha pronunciado se encuentran los relacionados con la relación médico-paciente, el cambio de diagnóstico y de procedimiento para el tratamiento de una enfermedad, la continuidad y la integralidad de los servicios de salud, y el principio de no regresividad que gobierna la regulación de los derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente se puede afirmar que la continuidad y la integralidad constituyen dos principios esenciales del derecho a la salud. (Sent. T-603/10)

3.3. _ Normatividad legal y jurisprudencia constitucional sobre la prestación por parte de las EPS de los servicios respecto al Sistema de Seguridad Social en Salud, que se encuentren dentro o fuera del Plan Obligatorio de Salud.

El acceso a la Seguridad Social y a la Salud, es un derecho y a la vez es un servicio público que goza de especial protección por parte del Estado y es por ello que Nuestra Constitución Política en su artículo 48 dispone: "*La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantizará a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social (...)*"

La misma Carta Fundamental, señala en su artículo 49: "*La atención de la Salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (...)*".

La Ley ha sido consecuente con este precepto constitucional, y es así como en desarrollo de éste fue expedida la Ley 100 de 1.993 que en sus artículos 3° y 4°, predica:

"(...) DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social.

Este servicio será prestado por el Sistema de Seguridad Social Integral, en orden a la ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los términos establecidos por la presente ley (...)".

"(...) DEL SERVICIO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control esta a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente ley.

Este servicio público es esencial en lo relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (...)".

En su artículo 7° precisa:

"(...) ÁMBITO DE ACCIÓN. El Sistema de Seguridad Social Integral garantiza el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud, y la prestación de servicios sociales complementarios, en los términos y bajo las modalidades previstos por esta ley (...)".

De igual manera en su artículo 159 impone a las EPS la obligación de garantizar a sus afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud la debida organización y prestación del servicio de salud, en los siguientes términos: "*1._ La atención de los servicios del Plan Obligatorio de Salud del artículo 162, por parte de la Entidad Promotora de Salud Respectiva a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios adscritos 2._ ... (...)*". La norma en comento, en su artículo 162 consagra los parámetros del Plan Obligatorio de Salud, de la siguiente manera:

"(...) PLAN DE SALUD OBLIGATORIO. El Sistema General de Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional antes del año 2001. Este Plan permitirá la protección integral de las

familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan (...).

"(...) Para los afiliados cotizantes según las normas del régimen contributivo, el contenido del Plan Obligatorio de Salud que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en salud será el contemplado por el decreto-ley 1650 de 1977 y sus reglamentaciones, incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su presentación genérica. Para los otros beneficiarios de la familia del cotizante, el Plan Obligatorio de Salud será similar al anterior, pero en su financiación concurrirán los pagos moderadores, especialmente en el primer nivel de atención, en los términos del artículo de la presente Ley (...).

Para los afiliados según las normas del régimen subsidiado, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud diseñará un programa para que sus beneficiarios alcancen el Plan Obligatorio del Sistema Contributivo, en forma progresiva antes del año 2.001. En su punto de partida, el plan incluirá servicios de salud del primer nivel por un valor equivalente al 50% de la unidad de pago por capitación del sistema contributivo. Los servicios del segundo y tercer nivel se incorporarán progresivamente al plan de acuerdo con su aporte a los años de vida saludables (...)."

Se desprende entonces de la normatividad consultada que las EPS, se encuentran en la obligación de garantizarle a sus afiliados el acceso al servicio público de la Seguridad Social en Salud, el cual, además, conforme al precedente jurisprudencial de la Corte adquiere la connotación de un derecho fundamental autónomo, para lo cual ha de suministrar a sus afiliados los servicios que se encuentren dentro del Plan Obligatorio de Salud, sin la necesidad de trámites especiales o complejos. Servicios estos que contemplan, entre otros, el suministro de medicamentos, procedimientos, hospitalización, exámenes, tratamientos y toda la atención que estos requieran para atender y tratar la patología que padezcan, a fin de superarla o minimizar sus efectos.

En lo que atañe a los casos en los cuales las EPS niegan a una persona determinado tratamiento, procedimiento, implemento médico o un medicamento específico por no encontrarse incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha considerado que la acción de tutela procederá si se reúnen las siguientes condiciones: a)._ Que la falta del tratamiento, implemento, procedimiento o medicamento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos fundamentales a La Vida, a la Integridad o a la Dignidad del interesado. b)._ Que no exista un medicamento, tratamiento o procedimiento sustituto o que, existiendo este, no obtenga el mismo nivel de efectividad para proteger los derechos fundamentales comprometidos. c)._ Que el paciente se encuentre en incapacidad real de sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido. d)._ Que el paciente se encuentre imposibilitado para acceder al tratamiento, procedimiento, implemento o medicamento a través de cualquier otro sistema o plan de salud; y e)._ Que el tratamiento o medicamento hubiere sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante. "(...) *Excepcionalmente la tutela puede ser concedida, si la prescripción la hizo un médico particular, cuando debido a procedimientos administrativos de la ARS o EPS se vulneró el derecho al diagnóstico y el usuario tuvo que acudir a un médico externo (...)*". (Sent. T-835/05). (Negrillas y subrayas ajenas al texto original).

3.4._El caso concreto

En el evento que nos ocupa, del acervo probatorio acopiado el despacho advierte que la presente acción de amparo persigue que esta casa judicial ordene a la entidad accionada COOMEVA EPS, a la cual se encuentra afiliada la paciente agenciada LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ, proceda a autorizar las intervenciones y los instrumentos necesarios para [el tratamiento] de las heridas sufridas por esta con ocasión de un accidente de tránsito, y se ordene a la Clínica Arenas, que proceda de manera diligente e inmediata a realizarle las intervenciones quirúrgicas necesarias y demás tratamientos que necesarias para el manejo de sus lesiones, y por último, que en el evento en que previa a la emisión del fallo de tutela las accionadas hayan cumplido con las obligaciones que les corresponde a cada una, solicita que les ordene a las mismas abstenerse de presentar nuevas obstaculizaciones para la

REF: Acción de tutela promovida por la señora por LEIDYS JULIETH CRESPO ESTRADA actuando como agente oficioso de su señora madre LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ, en contra de COOMEVA EPS Y CLINICA ARENAS EPS. RAD. 200134089001-2020-00116-00.

prestación de los servicios asistenciales a su madre, tanto en urgencias como en el pos operatorio.

Ahora bien, como quiera que, conforme a lo plasmado en el informe que antecede por parte del señor secretario de este despacho, se pudo establecer que el pasado 10 de Diciembre de 2020, mediante comunicación vía telefónica con la accionante señora LEIDYS JULIETH CRESPO ESTRADA señora LEIDYS JULIETH CRESPO ESTRADA al abonado 3232244646, que la intervención quirúrgica solicitada ya fue realizada a la paciente, quien se encuentra en observación, por lo tanto esta pretensión ya fue satisfecha, por lo que sobre la misma no habrá pronunciamiento, no obstante si lo habrá respeto a la atención integral que esta requiere para el manejo y tratamiento de su patología, a fin de obtener su completa recuperación, toda vez que mientras se continúe obstaculizándose o poniéndosele talanqueras y dificultades para el suministro o prestación de la atención que esta requiere para lograr su recuperación de su salud, se le continuarían vulnerando sus derechos fundamentales a la Vida en condiciones Dignas, Integridad Física y Seguridad Social en Salud, por lo que se impone al juez constitucional el deber de garantizar la atención efectiva de su salud, removiendo las barreras que restringen el acceso a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y en razón a ello será concedido el amparo constitucional deprecado, ordenando con ese fin a los señores representantes legales o a quienes hagan sus veces, de las entidades accionadas COOMEVA EPS y la CLÍNICA ARENAS, según sus competencias, que en un término no superior a Cuarenta y Ocho (48) horas contadas a partir de la notificación d este fallo, procedan a brindarle a la paciente agenciada señora LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ, la atención integral prescrita por sus médicos tratantes, que esta requiera para el manejo y tratamiento de su patología, derivada del accidente de tránsito que le generó la lesiones a las que se contrae esta acción de tutela. De la misma manera se les propondrá para que en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en las conductas omisivas que dieron origen a la presente acción de amparo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero._ Conceder el amparo tutelar a los derechos fundamentales a la Vida en condiciones de dignidad, Integridad Física y Seguridad Social en Salud, e la paciente agenda señora **LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ**, solicitado por la señora **LEIDYS JULIETH CRESPO ESTRADA**. En consecuencia se les ordena a los Representantes Legales, o a quienes hagan sus veces, de las entidades accionadas **COOMEVA EPS y LA CLÍNICA ARENAS**, según sus competencias, que en un término no superior a Cuarenta y Ocho (48) horas contadas a partir de la notificación d este fallo, si aún no lo hubieran hecho, procedan a brindarle a la paciente agenciada señora **LEIDYS ESTRADA HERNÁNDEZ**, la atención integral prescrita por sus médicos tratantes, que esta requiera para el manejo y tratamiento de su patología, derivada del accidente de tránsito que le generó la lesiones a las que se contrae esta acción de tutela.

Segundo._ Prevenir a los Representantes Legales de las entidades accionadas para que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas omisivas que dieron origen a la presente acción de amparo.

Tercero. - Notifíquese este fallo a las partes intervinientes por el medio más expedito (art. 16 del Decreto 2591 de 1991).

Cuarto. _ Contra esta decisión procede el recurso de impugnación. Si no fuere impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

ALGEMIRO DÍAZ MAYA
Juez